

CONTINUACIÓN DE LA 24ª SESIÓN ORDINARIA. 22 DE JULIO DE 1905

PRESIDENCIA DEL DOCTOR FIGUEROA ALCORTA

SUMARIO: I.—Asuntos entrados.

II.—A moción del señor Senador Uriburu, se trata sobre tablas un despacho de las comisiones de Negocios Constitucionales y Legislación en los proyectos de ley, en revisión, sobre reforma de la **Ley electoral**. Se aprueba modificado.

III.—Asuntos entrados.

IV.—Cambio de observaciones sobre el destino de un asunto á comisión.

V.—Termina la consideración del proyecto sobre **registros de marina**.

SEÑORES SENADORES

Alvarez
Avellaneda
Diaz
Doncel
Figueroa
Funes
García
Herrera
Lainez
Maciá
Mantilla
Mendoza
Palacio
Pérez
Puccio
Pinto
Quiroga
Soldati
Uriburu (F.)
Yofre

En Buenos Aires, á los veintidós días del mes de julio de mil novecientos cinco, reunidos en su sala de sesiones el señor Presidente y los señores senadores al margen designados, continúa la sesión con inasistencia de los señores Alvarado, Del Campillo, Morón y Terán con licencia; Echagüe, Irigoyen, Uriburu (J. E.), Villanueva (B.), Villanueva (E.) y Virasoro con aviso.

tos consignadas en el inciso 16, ítem 1º y 5º del anexo E. de la Ley de Presupuesto general en vigencia; y que las cuotas de pesos 30.000 y 12.000, respectivamente, han obtenido sanción definitiva.

—Al archivo.

La Cámara de Diputados remite, para su revisión, el proyecto de ley referente á la construcción é instalación de varias líneas telegráficas en la provincia de Corrientes.

—A la Comisión del Interior.

PETICIONES PARTICULARES

El señor José Mussini solicita se le conceda el derecho de construir y explotar una línea de tramway á tracción mecánica que, partiendo de las inmediaciones de la Estación 11 de Septiembre, termine en Villa Obrera.

—A la misma.

I

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

El Poder Ejecutivo acusa recibo del proyecto de ley ampliando las partidas de gas-

II

DESPACHO DE COMISIONES

Las de Negocios Constitucionales y Legislación se han expedido en los proyectos de ley, en revisión, sobre reforma de la Ley Electoral.

Sr. Uribe (F.) — Hago moción, señor Presidente, para que este asunto sea tratado sobre tablas.

No desconozco su importancia y gravedad; pero, ya ha sido suficientemente discutido tanto en esta Cámara, cuando se inició esa ley, como en la Cámara de Diputados, cuando se trató de sus modificaciones.

Pienso, pues, que el tiempo que perdamos en despacharlo, no modificará absolutamente el criterio que respecto de él se hayan formado los señores senadores.

En ese sentido es que hago la moción que he formulado.

- Apoyado.

Sr. Pérez—Pido la palabra.

Con sentimiento, señor Presidente, voy á votar en contra de la moción que acaba de hacer el señor Senador por Salta.

Soy uno de los miembros de las comisiones que han intervenido en el estudio y despacho de este asunto, aceptando la sanción de la Cámara de Diputados en la parte fundamental de los dos proyectos venidos en revisión.

En las comisiones, en los dos ó tres días que hemos tenido de tiempo para estudiarlos, hemos podido felizmente armonizar ideas respecto de las modificaciones substanciales introducidas por este proyecto á la ley vigente: la una, que se refiere al cambio de sistema, y la otra que se refiere á la penalidad.

Las mismas discusiones, que han dado lugar á las comisiones para formular

el despacho que acaba de presentarse, han demostrado la gravedad é importancia de este asunto; porque, aunque él se haya discutido largamente en la Cámara de Diputados, no muchos de los señores senadores, al menos el que habla, han seguido su debate, porque no han podido concurrir á todas las sesiones en que se ha discutido con tanta extensión, con tanta ciencia y elocuencia, ni leer las publicaciones respectivas.

Creo, señor Presidente, que nada vamos á perder, que ningún interés se va á comprometer con que este asunto, siguiendo los trámites reglamentarios, pase á la orden del día, á fin de que él sea tratado en la sesión próxima.

Creo también, como el señor Senador por Salta, que el hecho de esta demora no va á cambiar la opinión ya formada de los señores senadores, respecto de las disposiciones consignadas en este proyecto; pero, me parece, que por lo mismo que existe la gravedad que reconoce el señor Senador, por lo mismo que ha dado lugar á un debate tan extenso como luminoso en la otra Cámara, es posible que aquí también, si no toma el debate el mismo vuelo que allí, pueda producirse, y entonces es necesario que, los mismos señores senadores que lo quieran impugnar ó sostener, tengan un poco de tiempo á fin de estudiarlo y formar conciencia plena respecto de él.

Por estas breves consideraciones, voy á votar en contra de la moción del señor Senador por Salta.

Sr. Uribe (F.)—Las consideraciones expuestas por el señor Senador serían muy pertinentes si se tratara del estudio del asunto en el seno de la Comisión; porque, efectivamente, ésta necesitaría tiempo para ilustrarse; y me llama la atención que el señor Senador, que pone su firma al pie de este despacho, necesite todavía ilustrarse, cuando ya nos ha dado su fallo; de tal manera, señor Presidente, que yo creo que la última parte de la exposición del

señor Senador, es la verdad; que la pérdida de tiempo en tratarlo no traerá un nuevo argumento á la cuestión, por consiguiente, sólo serviría para preparar algunos discursos para el debate, lo que se podrá hacer, y yo no me opongo á que dure el debate tres, cinco, diez días; pero, á lo que sí me opongo es á que perdamos tiempo.

He dicho.

Sr. Presidente— Si ningún señor Senador hace uso de la palabra, se va á votar la moción hecha por el señor Senador por Salta.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Mantilla—Pido que en el acta se haga constar mi voto en contra.

Sr. Avellaneda — Igualmente el mío.

Sr. Presidente—Así se hará.

Sr. Pérez—El mío, no hay necesidad, desde que he hablado en contra de la moción.

—Se lee:

Honorable Senado:

Las Comisiones de Negocios Constitucionales y Legislación han estudiado los proyectos de ley, venidos en revisión, reformando la Ley Electoral; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan que, en substitución de aquéllos, prestéis vuestra aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—La Capital y las provincias se consideran como distritos electorales de un solo Estado para elegir electores calificados de Senador por la Capital, diputados al Congreso y electores calificados de Presidente y de Vicepresidente de la Nación.

Art. 2º—Cada distrito se dividirá en secciones electorales. Cada parroquia en las ciudades y cada departamento en las campañas formarán una sección electoral.

Art. 3º—Cada distrito elegirá el número de

electores calificados de Presidente y Vicepresidente de la Nación y el número de diputados que le correspondan en la renovación bional de la Cámara de Diputados. El distrito de la capital elegirá los electores calificados de senador, en la forma prescripta para la elección de Presidente de la Nación.

Art. 4º—Cada elector votará por el número de diputados ó de electores calificados que corresponda al distrito.

Art. 5º—Abiertos los pliegos á que se refiere el inciso 2º, del artículo 82, de la ley 4161, la junta hará inmediatamente el escrutinio general, terminándolo y proclamando en la misma sesión los diputados y los electores calificados, que resulten electos por mayor numero de votos en el distrito.

Art. 6º—Suprímese la palabra «circunscripción» y las proposiciones, artículos y conjunciones que le siguen ó anteceden, en los artículos 45 y 46 de la ley 4161. Substitúyese la palabra «circunscripción», por la palabra «sección» en el artículo 47; y por la palabra «distrito», en el inciso 3º del artículo 55, en el artículo 66 y en el artículo 82 de la misma ley.

Art. 7º—Serán penados con arresto de seis meses á un año:

- 1.º Los miembros de la justicia federal y local de la Capital y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios; los empleados y funcionarios de policía de la Capital y de las provincias y los empleados del registro civil dependientes del Gobierno de la Nación y de las provincias; de cualquier jerarquía que sean, que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado durante las luchas ó que en cualquier tiempo hagan acto de adhesión ostensible ó de oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el derecho de emitir su voto;
- 2.º Los funcionarios públicos nacionales ó provinciales que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ú oficina, uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados.

Art. 8º—Todas las faltas enumeradas y las penas establecidas en el artículo anterior y

Julio 22 de 1905

CÁMARA DE SENADORES

24.ª sesión ordinaria

en la Ley Electoral se entenderán sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal y los que correspondan por delitos comunes conexos ó correlacionados con los hechos previstos y penados en la Ley Electoral y en la presente, llevarán consigo como consecuencia inmediata:

1.º La privación temporaria del derecho de sufragio y pérdida del empleo cuando el culpable es funcionario público; si el funcionario fuera del Poder Judicial, de la policía ó del registro civil quedará además inhabilitado para el desempeño de todo puesto público por cinco años;

2.º En caso de reincidencia, la pena será la incapacidad absoluta por tiempo indeterminado para todos los funcionarios públicos y la incapacidad absoluta, pero temporaria, para los particulares.

Art. 9º—Todos los juicios motivados por infracciones á la Ley Electoral y á la presente serán sustanciados ante los juzgados federales, con intervención del agente fiscal.

Quando recaigan contra funcionarios que por la Constitución Nacional ó por las constituciones provinciales gocen de inmunidades para estar en juicio, éste no podrá llevarse adelante, sin que previamente se hayan levantado las inmunidades por quien corresponda.

Art. 10—Salvo las reglas prescriptas para algunos juicios especiales en la Ley Electoral se observarán las siguientes:

1.ª Presentada la acusación, el tribunal citará á juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los diez días después de la citación;

2.ª Si resultare necesaria la prueba, se podrá fijar un término, como base de tres días, durante los cuales deberán solicitarse todas las diligencias conducentes á producirla;

3.ª Los jueces, á petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda la remisión del documento que se denuncie como falsificado ó adulterado á los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento ó documentos pedidos, se citarán inmediatamente á nueva audiencia, en la cual se examinarán

testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, y levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto á las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del comparendo, previa vista del agente fiscal;

4.ª El retardo de justicia en estos casos, será penado con multa de doscientos á quinientos pesos;

5.ª El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista, y la sentencia que se diere producirá ejecutoria aunque se dicte en rebeldía del acusado.

Art. 11—Toda sentencia definitiva será apelable.

1º Para ante los jueces nacionales de sección de toda resolución de las juntas electorales de distrito;

2º Para ante las cámaras federales de apelación, de los fallos de los jueces de sección.

Art. 12—Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, el inciso 2º del artículo 73, inciso 3º del artículo 82 y las disposiciones contrarias á la presente del inciso 1º del artículo 55 y del inciso 3º del artículo 73, y los artículos 110, 111, 112, 113, 116 y 117 de la ley número 4161.

Art. 13—Comuníquese al Poder Ejecutivo. Sala de la comisión, julio 19 de 1905.

Herrera.—Eugenio Puccio—Rafael M. Funes—Domingo T. Pérez.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—La Capital y las provincias se consideran como distritos electorales de un solo estado para elegir electores calificados de Senador por la Capital, diputados al Congreso y electores calificados de Presidente y Vicepresidente de la Nación.

Art. 2º—Cada distrito se dividirá en secciones electorales. Cada parroquia en las ciudades y cada departamento en las campañas formarán una sección electoral.

Art. 3º—Cada distrito elegirá el número de electores calificados de Presidente y Vicepresidente de la Nación y el número de

diputados que le corresponda en la renovación bienal de la Cámara de Diputados. El distrito de la Capital elegirá los electores calificados de Senador, en la forma prescripta para la elección de Presidente de la Nación.

Art. 4º—Cada elector votará por el número de diputados ó de electores calificados que corresponda al distrito.

Art. 5º—Abiertos los pliegos á que se refiere el inciso 2º, del artículo 82, de la ley 4161, la junta hará inmediatamente el escrutinio general, terminándolo y proclamando en la misma sesión los diputados y los electores calificados que resulten electos por mayor número de votos en el distrito.

Art. 6º—Suprímese la palabra «circunscripción» y las preposiciones, artículos y conjunciones que le siguen ó anteceden, en los artículos 45 y 46 de la ley 4161. Sustitúyese la palabra «circunscripción», por la palabra «sección» en el artículo 47; y por la palabra «distrito», en el inciso 3º del artículo 55, en el artículo 66 y en el artículo 82 de la misma ley.

Art. 7º—Deróganse los artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, el inciso 2º del artículo 73, inciso 3º del artículo 82 y las disposiciones contrarias á la presente del inciso 1º del artículo 55 y del inciso 3º del artículo 73 de la ley 4161.

Art. 8º—Comuníquese al Poder Ejecutivo

Dado en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, á 15 de julio de 1905.

A. SASTRE
Alejandro Sorondo
Secretario.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º—Serán penados con arresto de seis meses á un año:

- 1.º Los miembros de la justicia federal y local de la Capital y de las provincias, comprendidos los jueces de paz, asesores, fiscales, defensores y secretarios; los empleados y funcionarios de policía de la Capital y de las provincias, que directa ó indirectamente tomen participación política en favor de partido ó candidato determinado durante las luchas ó que en cualquier tiempo hagan acto de adhesión ostensible ó de

oposición manifiesta con relación á los partidos políticos existentes ó en formación, salvo el derecho de emitir su voto;

- 2.º Los funcionarios públicos nacionales ó provinciales que tengan bajo su dependencia, como jefes de repartición ú oficina, uno ó más empleados y los induzcan á adherir á candidatos ó partidos determinados.

Art. 2º—Todas las faltas enumeradas y las penas establecidas en el artículo anterior y en la Ley Electoral se entenderán sin perjuicio de lo que dispone el Código Penal y los que correspondan por delitos comunes conexos ó correlacionados con los hechos previstos y penados en la Ley Electoral y en la presente, llevarán consigo como consecuencia inmediata:

- 1.º La privación temporal del derecho de sufragio y pérdida del empleo cuando el culpable es funcionario público; si el funcionario fuera del Poder Judicial ó de la policía quedará además inhabilitado para el desempeño de todo puesto público por cinco años;
- 2.º En caso de reincidencia, la pena será la incapacidad absoluta por tiempo indeterminado para todos los funcionarios públicos; y la incapacidad absoluta, pero temporal, para los particulares.

Art. 3º—Todos los juicios motivados por infracciones á la Ley Electoral y á la presente serán sustanciados ante los juzgados federales, con intervención del agente fiscal.

Quando recaigan contra funcionarios que por la Constitución Nacional ó por las constituciones provinciales gocen de inmunidades para estar en juicio, éste no podrá llevarse adelante, sin que previamente se hayan levantado las inmunidades por quien corresponda.

Art. 4º—Salvo las reglas prescriptas para algunos juicios especiales en la Ley Electoral se observarán las siguientes:

- 1.º Presentada la acusación, el tribunal citará á juicio verbal y actuado al acusador y al acusado, dentro de los diez días después de la citación;
- 2.º Si resultare necesaria la prueba, se podrá fijar un término, como base de tres días, durante los cuales deberán

solicitar todas las diligencias conducentes á producirla;

- 3.º Los jueces, á petición de parte, podrán solicitar de quien corresponda la remisión del documento que se denuncie como falsificado ó adulterado, á los efectos del juicio, y vencidos los tres días fijados en el inciso anterior, y recibido el documento ó documentos pedidos, se citarán inmediatamente á nueva audiencia, en la cual se examinarán testigos públicamente, se oirá la acusación y la defensa, y levantándose acta de todo, se citará en el mismo acto á las partes para sentencia, la que se dictará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes del comparendo, previa vista del agente fiscal;
- 4.º El retardo de justicia en estos casos será penado con multa de doscientos á quinientos pesos;
- 5.º El procedimiento en las causas electorales continuará aunque el querellante desista.

Art. 5.º—Toda sentencia definitiva será apelable:

- 1.º—Para ante los jueces nacionales de sección, de toda resolución de las juntas electorales de distrito.
- 2.º—Para ante las cámaras federales de apelación, de los fallos de los jueces, de sección.

Art. 6.º—Deróganse los artículos 110, 111, 113, 116 y 117, de la Ley Electoral, número 161.

Art. 7.º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Cámara de Diputados, en Buenos Aires, á 19 de julio de 1905.

A. SASTRE
Alejandro Sorondo
Secretario

Sr. Uribe (F.)—Pido la palabra. Creo conveniente que se llame al señor Ministro del Interior para que asista á este debate.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Estando apoyada la moción del señor Senador por Salta,

se votará si se invita al señor Ministro del Interior á concurrir á este debate.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Avellaneda—Pido permiso á la Presidencia para retirarme de la sesión.

Sr. Figueroa—Mientras viene el señor Ministro puede escucharse al miembro informante.

Sr. Presidente—Habiendo número bastante en el recinto, puede retirarse el señor Senador por La Rioja.

—Se retira del recinto el señor Senador por La Rioja, don Lidoro J. Avellaneda.

Sr. Presidente—Está en discusión en general.

—Entra al recinto y ocupa su asiento el señor Ministro del Interior, doctor Rafael Castillo.

Sr. Herrera—Pido la palabra.

Las comisiones de Legislación y Negocios Constitucionales me han hecho el honor de confiarme el informe de este despacho. Podría invocar las mismas razones del señor Senador por Jujuy, pues yo no estaba preparado para afrontar la discusión; estaba preparado para firmarlo, pero no para informarlo, pues recién ayer á última hora, al expedirse las comisiones, recibí el encargo de dar los fundamentos del proyecto.

Esto no obstante, voy á dar á la honorable Cámara las razones que las comisiones han tenido para aconsejar la sanción del proyecto, que se ha resuelto considerar sobre tablas.

Pediré sólo disculpa si mi exposición, por falta de tiempo, resulta pálida.

Ahora, antes de entrar á lo más importante, me permitiré exponer en qué consisten, las reformas introducidas al proyecto de la Cámara de Diputados.

Se acepta sin modificación el proyecto de la Cámara de Diputados incorporando el artículo 7º al despacho de la

Comisión. Se acepta el segundo proyecto venido de la Cámara de Diputados, relativo á las inmunidades de los funcionarios públicos, y se le incluye en el despacho como artículos 12 á 18; pero, con la siguiente modificación: en el inciso 1.º del artículo 1.º de la Cámara de Diputados y 13 del despacho se agrega: «y los empleados del».

En el artículo 4.º inciso 5.º se agrega: «y la sentencia que se diese producirá».

El artículo 7.º del proyecto de la Cámara de Diputados está incluido en el 18 del despacho y comprende todos los artículos.

Ahora, señor Presidente, voy á exponer la manera cómo ha encarado la Comisión la cuestión más importante que entraña este proyecto.

El proyecto mandado por el Poder Ejecutivo y sancionado por la Cámara de Diputados reforma la Ley Electoral vigente sustituyendo el sistema uninominal, adoptado por ella, por el sistema de lista, dándose por razón el ser repugnante á la Constitución.

Y bien: la primera cuestión que se presentó á la Comisión fué ésta: ¿El sistema de lista ha sido expresamente adoptado por la Constitución ó ésta se ha abstenido á adoptar sistema alguno, dejando en libertad al Congreso para legislar sobre éste y demás puntos que debe comprender una ley de elecciones? Esta cuestión era previa, señor Presidente, pues si la Constitución se ha pronunciado en favor de algún sistema, toda discusión acerca de él sería ociosa, pues no cabría más que cumplir la Constitución; y, si ella no ha sancionado ninguno, entonces sería el caso de discutir con toda amplitud cuál es el sistema que más conviene, en la actualidad, á la República Argentina.

La Comisión se pronunció desde el primer momento decididamente en favor del proyecto, por creer que la Constitución ha adoptado expresamente el sistema de lista.

Véamos cuáles son las razones que se

han dado para sostener lo contrario, es decir, que la ley vigente está encuadrada dentro de lo prescripto por el artículo 31 de la Constitución.

Se principia por reconocer que la letra del artículo es poco favorable á esta conclusión y apelando á su espíritu se dice: 1.º Que la denominación de «distritos electorales de un solo Estado» tiene por objeto establecer la base de la distribución ó prorratio de la representación que á las provincias corresponde; 2.º Que la Constitución habla de elección *directa*, lo que supone el conocimiento personal del candidato por los sufragantes; 3.º Que de los artículos 16, 22 y 33, que concurren á definir lo que es el derecho electoral, se deduce que la Constitución no se ha propuesto establecer ningún sistema.

No conozco más argumentos y, si he omitido alguno, agradecería á algún señor Senador que me lo hiciera conocer.

Desde luego, se confiesa que la letra de la Constitución da la razón á los que sostienen que el sistema uninominal no es el que ella sostiene; y así es en efecto.

La Constitución dice que los diputados representarán la Nación, pero serán elegidos cada uno de ellos por todo el pueblo de la provincia. Una cosa es representación, otra elección; los diputados representan á la Nación, pero los elige el pueblo de la provincia. Es violentar mucho el lenguaje de la Constitución al sostener que cuando dice que, «serán elegidos por el pueblo de la provincia», quiera decir que serán elegidos por una fracción de él. Desde el momento que el pueblo de la provincia se fracciona, esta fracción ya no es ese pueblo, la parte no puede ser igual al todo. Pero para aclarar aun más su pensamiento agregó: «que se considerará á este fin (a la de la elección) como distritos electorales de un solo Estado».

¿Qué es un distrito electoral? La porción de territorio donde se elige un determinado número de diputados; de manera que, cuando la Constitución habla

de un solo distrito, la ley no puede hacer varios. Pero, dándose á esta disposición una interpretación más casuística que exacta, se dice que ella emplea la palabra distrito electoral como queriendo significar que cada provincia debe tener un determinado número de diputados; de manera* que, adonde dice distrito no dice distrito, sino dice prorrato de diputados. Singularísima manera de expresar una idea obscureciéndola, al parecer, de intento.

Si tal hubiera sido el pensamiento de la Constitución, no sólo hubiera empleado distinta redacción, sino que el 39 pudo redactarlo así: «Para la segunda legislatura deberá realizarse el censo general y arreglarse á él el número de diputados, determinándose los que correspondan á cada provincia y á la Capital».

¿Puede suponerse, señor Presidente, que el gran publicista Alberdi, los constituyentes del 53 y los sabios constituyentes del 60, en cuya comisión figuraban: el general Mitre, nuestro *great old man*, que tan admirablemente domina el idioma de Cervantes, el genial Sarmiento, el literato Mármol el doctor Vélez Sarsfield, en cuyos discursos de sabor clásico se apercibe cuán familiarizado estaban con los autores latinos, puede suponerse, digo, que estos hombres hubieran empleado una redacción tan oscura y tan impropia para expresar una idea sencilla, tanto más cuanto en el período que trascurrió desde el 53 hasta el 60 y en la ley electoral del 58 se había interpretado en la misma forma que ha sido interpretada después, es decir, que la elección debe hacerse por lista?

Se dice también que la Constitución habla de elección directa en el sentido de que exista vinculación entre el candidato y el pueblo que lo elige. Pero, señor Presidente, en el lenguaje constitucional, *directa* quiere decir elección de primer grado, como, *indirecta*, elección de segundo ó tercer grado. Es decir, la elección es *directa* cuando el pueblo da sus votos por la persona que desee que

ocupe el cargo de que se trata é indirecta cuando el pueblo sólo concurre indirectamente, eligiendo á las personas que lo han de nombrar. Por otra parte, como la ley no exige la residencia en la circunscripción, en el hecho se elige á un extraño á ella que no conoce las necesidades locales. En las provincias, por lo común, se eligen personas domiciliadas en la capital de ellas, exactamente como se hacía en la elección por lista.

Pero, dejemos la letra de la Constitución, que tan clara es, y vamos á su espíritu, que se deduce, según se dice, de los artículos 16, 22 y 33.

El artículo 16 dice: ... *Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.* ¿En qué se compromete la igualdad que establece este artículo con la elección por lista á simple pluralidad de sufragios? Veamos lo que dice el señor González en su obra de Derecho Constitucional:—*La mayoría es la regla fundamental de todo gobierno del pueblo y de toda forma representativa; pero, puede ser atemperada* (puede ser no es necesario que lo sea) *con el fin de dar á la minoría su representación en la proporción que corresponda á la cantidad de votos.*

El artículo 22 dice: *El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta constitución. Toda fuerza armada ó reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y petitione á nombre de este comete delito de sedición.*

Como no comprendo qué relación tenga este artículo con el régimen electoral, lo pasaré por alto.

El artículo 33 dice: *Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del*

principio de la soberanía del pueblo, y de la forma republicana de gobierno. Su alcance nos lo va á dar la Comisión de la Convención reformadora del 60, que fué quien lo propuso (la Constitución del 53 no lo traía) tomándolo de las enmiendas á la Constitución de los Estados Unidos. Dice ella en su informe que los derechos á que se refiere el capítulo I de la Constitución son aquellos que nacen de su propia naturaleza de hombres ó de pueblos, que forman el derecho natural de los individuos y de las sociedades, que ni ellos pueden renunciar ni las leyes abrogar.

¿Y quién no ve, señor Presidente, que la manera de ejercitar el sufragio no son de esos derechos inalienables y las leyes la reglan en la forma que les parece más conveniente?

Para interpretar el espíritu de la Constitución, la fuente más preciosa son los antecedentes constitucionales del país y sus prácticas anteriores. Y bien, veamos lo que disponían los estatutos que nos han regido desde el año 10 en cuanto reglan la función electoral, el proyecto de Alberdi y la Constitución del 53.

El estatuto de 5 de mayo de 1815 establecía que la elección de diputados se practicara por una elección de segundo grado. En las asambleas primarias votaban los ciudadanos por un elector en razón de 1 por cada 5.000 habitantes y los electores reunidos en la capital de la provincia nombraban un diputado por cada 15.000 habitantes.

El estatuto de 1817 mantenía el mismo régimen de 1815.

La constitución unitaria del año 19 estableció que mientras la legislatura no arreglase el método de la elección, los diputados serían elegidos según lo dispuesto en el reglamento provisorio.

En esta convención se discutió un punto que tiene relación con el presente debate. Se discutió: si para los efectos de la distribución de asientos, se debía tomar como punto de partida las pro-

vincias como distrito general ó cada una de las ciudades que entraban en su jurisdicción. Se añadió que la práctica era que las ciudades eligieran los diputados. Así había sido elegida la asamblea de 1812, la constituyente del mismo año y el congreso que debatió la cuestión. El estatuto de 1815, se decía, atribuye la representación no á las ciudades sino á las provincias, que eran las que formaban el verdadero distrito electoral, porque las subdivisiones sólo servían para elegir los electores que en asamblea designaban los diputados. No llegó á resolverse esta cuestión.

La constitución unitaria del 26 establecía dos cámaras; la de diputados se componía por nombramiento directo de los pueblos á simple pluralidad de sufragios en la proporción de 1 por cada 15.000 habitantes.

Como se ve, señor Presidente, la práctica constante en el país, después de los primeros años de la revolución, en que las elecciones se hacían por ciudades, ha sido la elección por lista, considerando cada provincia como un solo distrito electoral.

Viene después el proyecto de constitución de Alberdi, que consigna una disposición sustancialmente idéntica al artículo 37, lo que prueba que él quiso ratificar esa práctica, pues de otro modo no hubiera empleado un lenguaje cuya interpretación más fácil (los hechos posteriores lo han probado) era la elección por lista.—«Artículo 61.—La Cámara de Diputados representa la Nación en globo y sus miembros son elegidos por el pueblo de las provincias, que se consideran á este fin como distritos electorales de un solo Estado.» Y agrega: «Cada diputado representará á la Nación, no al pueblo que lo elige.» Se ve cuánto cuidado ponía Alberdi en ser comprendido; pues vuelve á repetir que *cada* diputado representa á la Nación *no al pueblo que lo elige*. De suerte, que cada diputado debe ser elegido ¿por quién? Por el pueblo de la provincia.

La constitución del 53 reproduce casi textualmente esta disposición de la de Alberdi: «Art. 33. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se considerarán á este fin, como distritos electorales de un solo Estado y á simple pluralidad de sufragios, en razón de uno por cada 20 000 ó de una fracción que no baje de 10.000.»

¿Se puede pensar, señor Presidente, que la sabia Convención del 60, que revisó la del 53 después de siete años de vigencia y de haberse realizado todas las elecciones por lista, hubiera dejado subsistente, sin alterar una coma, ese artículo 33, así interpretado uniformemente? ¿Si Mitre, Vélez, Sarmiento, Gorostiza... eran enemigos, como se ha dicho, de este sistema, no hubieran cambiado su redacción para que no se comprenda de esa manera, así como cambiaron la redacción de otros artículos al solo objeto de aclarar sus disposiciones para que quedaran al alcance de cualquiera, como por ejemplo, el inciso 11 del artículo 67? Una de dos: ó esos hombres no eran contrarios al sistema de lista ó, siéndolo, tuvieron que declinar de sus convicciones, como declinaron en el caso de la Cámara de Senadores, pues ellos pensaban que era injusto dar igual representación á las provincias, en obsequio á la organización del país que todos anhelosamente esperamos.

Se ha dicho también que la Constitución ha querido que la Cámara de Diputados sea unitaria, porque era ya federal el Senado. No hay, señor Presidente, en nuestro sistema poderes federales ni poderes unitarios; hay gobierno federal ó unitario; el federalismo es un régimen que imprime su sello al gobierno todo. Es así que el Congreso tiene facultades limitadas á los poderes delegados, el Poder Ejecutivo lo mismo y los tribunales federales tienen sólo la jurisdicción de excepción que la Constitución les acuerda. Así como ésta dió igual

representación en el Senado á las provincias, así también estableció que á las provincias, como tales, les correspondía un determinado número de diputados elegidos por ellas, con arreglo á la población. Y lo mismo hicieron los Estados Unidos, aunque ellos fueron más lejos y establecieron en el artículo I, sección IV, que el tiempo, lugar y modo de hacer la elección serían determinados en cada Estado por su propia legislatura. Tan celosos fueron esos estados por su soberanía que llegaron hasta entregar á los estados la composición de la Cámara de Diputados. Ya ven los señores senadores si el federalismo, allá como aquí, imprimió su sello á la Cámara de Diputados como á todos los demás poderes. La ley, pues, no puede alterar esta prescripción dividiendo los distritos como no podrá tampoco hacer de varios uno; tan contrario á la Constitución es lo uno como lo otro.

Veamos ahora, señor Presidente, si es verdad que el escrutinio de lista haya producido los grandes males al país que se han señalado. El primero y el más grave es el *unicato*. Pero, señor Presidente, esta afirmación es enteramente caprichosa, porque sólo se funda en presunciones, que los hechos desautorizan.

La causa del mal no está en la elección por lista, sino en la carencia de grandes partidos orgánicos, que son indispensables en un gobierno democrático como el nuestro y en nuestras viciosas prácticas electorales.

Cuando esos partidos existieron, el *unicato* no era conocido.

Nuestros primeros partidos fueron el federal y el unitario, que cometieron grandes errores, pero que también hicieron grandes bienes al país. Pasaré por alto los primeros para sólo recordar que al partido federal debemos la organización del país bajo ese régimen y al partido unitario el derrocamiento de la tiranía. Estos partidos eran poderosos, con arraigo en la Nación entera y el *unicato* era desconocido.

Vinieron después los partidos autonomista y nacionalista, que llenaron la escena durante muchos años, y yo he podido presenciar, niño aún, la apasionada lucha á que se entregaban en todo el territorio de la nación. Entonces venían al Congreso autonomistas y nacionalistas y la unanimidad era desconocida. Ella vino cuando el partido nacionalista cometió el doble error de ir á la revolución, primero; á la abstención después, error que lo hizo desaparecer como gran partido orgánico, dejando solo en la escena al partido autonomista que, dueño del gobierno y sin control, debía abusar y abusó.

Si el partido nacionalista no hubiese cometido ese doble error, si hubiese continuado luchando en el terreno de las instituciones, sin acobardarse por su inferioridad numérica, hubiese aprovechado los numerosos desgarramientos del partido autonomista, desgarramientos inevitables en todo partido que está largo tiempo en el poder, y al fin hubiera subido al gobierno, realizando, para bien del país, ese flujo y reflujo continuo de los dos grandes partidos ingleses, que tan bien describe Macaulay.

No existe razón alguna para que la unanimidad sea consecuencia de la lista. Supónganse tres partidos: el partido A, el partido B y el partido C. Si esos partidos pueden actuar libremente ¿qué razón habría para que el A no tenga mayoría en 3 ó 4 provincias, el B, en otras y el C en otras? Como se comprende, no hay unanimidad posible. ¿No existen esos grandes partidos, ó, existiendo, no tienen libertad para luchar? Pues, entonces, aquí está el mal ó en la falta de partidos ó en la falta de libertad, y de ninguna manera la lista puede ser responsable de él.

El sistema uninominal da buenos resultados aquí, porque en esta capital se goza de completa libertad—cualquier sistema dará el mismo resultado. Entretanto, en las provincias, durante la vi-

gencia de la ley, no hemos experimentado modificación alguna.

El partido nacionalista, con su candidato Elizalde, no fué derrotado, estando en el poder, por su rival con la candidatura Sarmiento? Entonces, bajo un gobierno de libertad, como fué el del general Mitre, los partidos de oposición pueden fácilmente triunfar y hacerse dueños del poder á pesar de la lista ó, mejor dicho, á causa de la lista.

En efecto, sólo la lista es capaz de producir los grandes partidos nacionales, porque sólo el distrito extenso ensancha el horizonte político, crea ideales, mancomuna á los ciudadanos en un propósito grande, que no es el del campañero y, si triunfa, no es una persona, como decía Gambeta, es una idea la que triunfa! Sólo la idea tiene fuerza expansiva y no importa si en un principio, la levanta un pequeño núcleo, pues, como el puñado de nieve que se desprende de la montaña, aumenta de volumen á cada momento hasta que se convierte en la inmensa avalancha á la que nada resiste!

La pequeña circunscripción, por el contrario, hace obra disolvente, es causa de disgregación, separa fuerzas antes unidas, el ideal se achica hasta no ver más que el campanario, el interés personal y mezquino sustituye al ideal generoso, el egoísmo triunfa, el altruismo desaparece y los partidos se disuelven.

Sólo los grandes partidos, cuya formación la lista favorece, pueden influir en los destinos de un pueblo y consolidar sus instituciones, haciendo posible su libre juego. La Inglaterra, como los Estados Unidos, como todos los pueblos libres, sólo á ellos deben su estabilidad y sus progresos políticos. Sólo ellos harán que la libertad reine en todo el país, porque él se hará sentir con todo su poder en cualquier punto del territorio argentino, encarrilando á los grotescos tiranuelos de aldea, que sólo son tales porque carecen de control efectivo y eficiente.

Sólo los grandes partidos matarán la

revolución, sólo ellos harán imposible el despotismo, sólo ellos y nadie más que ellos encaminarán á la República á la consecución de sus grandes destinos!

Señor Presidente: nuestra corta, pero tormentosa historia nacional, ofrece lecciones que es necesario recoger. Desde sus comienzos la sociabilidad argentina se ha desarrollado entre la anarquía y el despotismo. Como el héroe de Homero, nuestro pueblo ha sido durante largos años el juguete de todos los vientos, de todas las tempestades y más de una vez llegó al borde del insondable abismo! Desde la organización nacional, la civilización ha ganado terreno, el progreso material nos embriaga, el mundo entero contempla con asombro este pueblo de ayer que ocupa ya tan gran lugar en el intercambio universal y las viejas naciones se preparan á luchar con este nuevo y temible competidor. Pero, señor Presidente, el progreso moral no avanza al mismo paso, las instituciones no están definitivamente consolidadas, la anarquía no ha muerto, la revolución asoma sus cien cabezas dispuesta á destruir en un día la obra, más que nuestra, de la Providencia, que ha dejado caer todas sus bendiciones sobre el territorio argentino.

Los que damos leyes á este país, necesitamos mirar lejos y darnos cuenta de este doloroso fenómeno. Para mí, señor Presidente, la causa principal de nuestros males y que me hace á veces desesperar del porvenir por que es tan difícil destruirlo, está en el carácter de la raza á que pertenecemos. No me refiero, señor Presidente, á la raza latina, pues hoy todo el mundo sabe que no hay tal raza latina sino civilización latina, me refiero á la verdadera raza, á la mediterránea, que pobló la España, la parte meridional de Italia y en mucha menor proporción á Francia.

Y bien, señor Presidente, el carácter fundamental de esa raza, como lo enseñan los sociólogos, es el individualismo, predominante á costa del sentimiento

social. Este individualismo produce lo mismo aquí que en España y en Italia, en lo político, la anarquía ó el gregarismo, las luchas fratricidas ó el despotismo; en lo social, la apatía, la inercia, la falta de iniciativa, y, en ambos, los antagonismos profundos, la anarquía de sentimientos y de ideas, las causas pequeñas sobreponiéndose á las grandes, la falta de rumbos definidos; y este carácter se ha acentuado aún más con la fusión de las razas aborígenas, que los norteamericanos extinguieron, tal vez para librarse de un peligro que presentían.

Y bien, señor Presidente, nosotros no podemos prescindir de este hecho al legislar y, al contrario, debemos tenerlo muy en cuenta, para modificarlo en cuanto sea posible por una educación apropiada, por la selección del inmigrante y otros medios análogos.

Pero, por ahora, haré sólo servir este hecho al proyecto en discusión. A este mal de raza le damos pábulo con el escrutinio uninominal, porque la circunscripción fomenta el individualismo, aísla al candidato y aísla al comicio, dificulta la acción colectiva y trae la disgregación de las fuerzas sociales. Por el contrario, los grandes partidos favorecen el desenvolvimiento del sentimiento social, enervan el individual, no combaten por uno, combaten por muchos, no combaten por hombres, combaten por una bandera, por un ideal, por un propósito altruista.

Para que el Senado se dé perfecta cuenta de los inconvenientes del sistema uninominal y de las ventajas de la lista, me voy á permitir leer lo que dijo Zanardelli en el parlamento italiano, en su relación sobre la ley del 82, que adoptó el escrutinio de lista. Los señores senadores no ignoran quién fué Zanardelli, el más grande y el más sabio hombre de estado que haya tenido Italia y uno de los más grandes de la Europa, cuya vastísima ilustración y admirable talento dotó á esta nación del código penal,

verdadero monumento levantado á la ciencia penal moderna, á pesar de no ser un criminalista en la acepción de la palabra.

Zanardelli se extiende largamente sobre los notorios inconvenientes del sistema uninominal y sobre las ventajas de la lista; sólo leeré dos párrafos: «A causa del sistema uninominal se corrompe el espíritu de las instituciones representativas, se humilla la dignidad del representante de la nación, se turba y vicia la atmósfera parlamentaria y administrativa, se paraliza, en fin, la obra legislativa, puesto que nadie puede desconocer que el pequeño colegio es la causa principal de que ninguna reforma importante se lleve á cabo. Por el contrario, ampliado el colegio, se desprende al elector, al candidato, al diputado del estrecho ambiente local, se extiende su horizonte, se eleva el objeto de la lucha en los comicios y en el parlamento, dándole más dignidad, carácter de lucha nacional y política. En el gran colegio no son ya los individuos que bajan á la arena electoral, sino los partidos con sus insignias y con sus ideas. El escrutinio no pronuncia un nombre, expresa un pensamiento. En el gran colegio de muchos millares de electores, no todos dominados por los mismos intereses, no todos guiados por las mismas personas, es sólo en nombre de su programa, de sus opiniones que el candidato puede hacerse conocer y apreciar».

Señor Presidente: se ha sostenido antes y se sostiene ahora que el Congreso debe proceder, al dictar sus leyes, con un criterio político, lo que vale decir que la Constitución no puede ser una traba para ejercitar ese criterio y que se le debe hacer á un lado ante determinadas exigencias. Es decir que nuestras ó nuestros perjuicios sobre lo que más convenga á la Nación, que nuestros honrados propósitos de labrar su felicidad deben primar sobre las prescrip-

ciones de la Constitución, ya que ella no ha podido tener otro fin que el bienestar del país. Y lo que se ha dicho, se ha hecho, inspirando nuestra legislación en lo que hemos creído que era más conveniente á la Nación.

Nos seduce una idea, nos apasiona, porque la creemos buena, porque creemos que su realización importa un progreso, y la discutimos con calor y la adoptamos casi siempre llámese intervención, llámese laicidad de la educación, llámese matrimonio civil, llámese divorcio, llámese sistema uninominal... sin preocuparnos mayormente si ella encuadra ó no dentro de la Constitución.

Nos viene de molde estas palabras de Alfredo Fouillé en su psicología del pueblo francés: «Un bello ejemplo de la manera cómo se habla á los franceses para hacerlos aceptar una medida legislativa son los preámbulos sentimentales de muchos proyectos de ley. Es en Francia que se verifica con brillo la teoría de las ideas fuerzas; no solamente hacemos la guerra por una idea, sino hacemos revoluciones, hacemos constituciones por una idea. Verdadera ó falsa, una fórmula concentra nuestro espíritu y al mismo tiempo ella mueve nuestros brazos y nuestras piernas».

¿No es verdad que esta pintura nos conviene más á nosotros que á los franceses?

¡Qué diferencia con la manera de proceder del pueblo inglés, que, pese á su forma monárquica, es el pueblo más libre de la tierra por el respeto de las instituciones, por su amor á las tradiciones, por su manera esencialmente práctica de legislar! Macaulay, en una de las páginas más admirables de su «Historia de la Revolución», nos pinta en rasgos geniales el criterio, más práctico que especulativo, que ha informado la legislación inglesa desde la época de Juan hasta la de Victoria, en los 250 parlamentos que se han sucedido. «Ja-

más se han preocupado de innovaciones innecesarias ó de suprimir una anomalía por ser tal». Cita, como ejemplo, el Acta Tabrancia, un tejido de errores y de contradicciones; pero que, por eso mismo, sin chocar con preocupaciones ó intereses importantes, hizo lo que no hubiese hecho una ley científicamente perfecta: concluyendo de un golpe una persecución que había durado cuatro generaciones.

Señor Presidente: este criterio político en la legislación ha hecho un daño inmenso al país.

Examinemos la Constitución.

El artículo 5º de la Constitución establece el régimen municipal, exigiéndolo al par de la administración de justicia como condición de garantía de las instituciones locales. ¿Lo hemos cumplido? ¿Hemos exigido á alguna provincia que lo establezca? Nó, señor Presidente; porque hemos pensado que no se debía cumplir en esta parte la Constitución porque las municipalidades han fracasado en todas partes.

Efectivamente, ellas han fracasado en esta capital, el centro de mayor cultura de la América latina y en las lejanas, pobres y atrasadas provincias del interior; pero, no hemos querido comprender que la Constitución no se propuso velar por la buena administración de los barrios quitando á las provincias esta facultad cuando tantas y tan importantes se habían reservado, sino que quiso hacer efectivo el régimen federal. Cuando ella adoptó, para la Nación Argentina, la forma federal de gobierno, lo hizo, aparte de razones históricas, porque pensó que era un peligro para las libertades de este pueblo naciente depositar todo el poder en las solas manos del gobierno central y que por el contrario, su mejor garantía estaba en la descentralización. Y si así lo pensó, lógico era que estableciese diferentes centros de autoridad: el gobierno general, el auto gobierno provincial y el auto gobierno local.

La comuna es, pues, la esencia en el régimen federal de gobierno.

Viene en seguida el artículo 6º, que habla sobre las intervenciones. ¿Para qué decir nada sobre esto si los señores senadores saben cómo han ido muchas intervenciones á las provincias y á lo que ha quedado reducida la autonomía de ellas?

El artículo 24 ordena el establecimiento del juicio por jurados y todavía está esperando su cumplimiento. Se dice que el jurado es un fracaso; y es verdad, es un fracaso en el mundo entero. Pero, el camino á adoptarse no era no cumplir la Constitución sino reformarla.

El Congreso tiene el deber de dictar planes de instrucción general y universitaria. ¿Se han dictado? Mientras tanto, esto que afecta tan hondamente al presente y al porvenir del país, está á merced de los ministros del ramo, que cambian todos los días los programas, llevando el desorden y el caos allí donde la atención del legislador debió fijarse con preferencia.

Basta esto para demostrar, que ese criterio político ha dado por resultado, en mi concepto al menos, que nuestras instituciones se hayan desnaturalizado, que los grandes frenos que creó la Constitución, para evitar los abusos del poder, hayan desaparecido, y que el porvenir se nos presente tenebroso, á pesar de nuestros progresos materiales.

¿A dónde vamos, señor Presidente, por este camino, sino á amontonar pavorosos problemas para el día de mañana?

Necesitamos reaccionar, señor Presidente. Este pequeño libro debe ser nuestro evangelio, el que guíe todos nuestros pasos de legisladores, la brújula que orienta esta nave tan azotada por todas las borrascas, por todas las tempestades que se llama República Argentina!

Necesitamos inspirar nuestra legislación en las grandes exigencias de la hora presente: demos al pueblo la dirección que necesita, para que llegue á

ser dueño de sus libertades políticas y de sus propios destinos.

Que nuestro ideal sea el cumplimiento de nuestras instituciones; y, así, el alma nacional se sentirá poderosa é incontrastable, tan grande como en la época legendaria de sus hazañas, porque el ideal encierra el secreto de la grandeza de los pueblos!

Yo sé, señor Presidente, que estas palabras mías caerán en el vacío, porque soy yo quien las pronuncia; pero me alienta la esperanza que día llegará en que estos votos serán escuchados.

Cuenta Plutarco que un moralista antiguo refería que había una ciudad donde las palabras se helaban inmediatamente de ser pronunciadas, y en ese estado quedaban hasta que llegaban los calores del estío y las palabras se fundían, escuchándose entonces distintivamente lo que antes se había hablado.

¡Pido al Cielo, señor Presidente, que mis helados conceptos se fundan mañana al calor del patriotismo argentino y que entonces estos anhelos, estos votos, inspirados en el más ardiente amor a mi patria, sean escuchados!

Me alienta la esperanza que así será, porque el señor Presidente de la República, á quien todos respetamos, no porque sea presidente solamente sino porque se llama Manuel Quintana, nombre que encarna una tradición de civismo, de honradez y de talento y del más puro patriotismo, me acompaña en estos anhelos.

El paso que acaba de dar pidiendo la reforma de la ley electoral, para que se cumpla en todo la Constitución y encareciendo la necesidad de los grandes partidos, vale por un gran programa.

Dejémoslo, señores senadores, que realice sus nobles propósitos; y, así, en 1910 podrá decir, como el mejor homenaje al centenario: abandono el gobierno al cual he dedicado los últimos años de mi vida y dejo cimentadas para siempre las libertades políticas del pueblo argentino!

Me falta aún algo que decir sobre el proyecto pero necesito terminar. Pido perdón á la Cámara.

Sr. Maciá—Podríamos pasar a cuarto intermedio.

Sr. Mantilla—Pido la palabra.

Yo votaré en contra de este proyecto de ley por convicción inquebrantable, que viene de antiguo; por lógica de tradición parlamentaria, y por lógica de criterio político.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Deseo que mi voto se consigne en favor del proyecto que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados, no porque crea que el escrutinio de lista, que es el punto fundamental de esta ley, sea el desiderátum del sistema electoral, que más tarde vendrá como una exigencia nacional á aplicarse en la República, sino porque lo considero muy superior al sistema del escrutinio uninominal por distrito.

Sr. Palacio—Podría tomarse nominalmente la votación.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se votará el despacho de las comisiones de Negocios Constitucionales y Legislación en la forma que se ha indicado.

— Así se hace, dando el siguiente resultado: Por la afirmativa, los señores senadores Figueroa, Doncel, Yofre, Soldati, Puccio, Uriburu (F.), Pinto, Herrera, Láinez, Alvarez, Flores, Quiroga y Pérez, y por la negativa los señores senadores García, Mendoza, Mantilla y Palacio.

—Al llegar el turno de votar el señor Maciá, dijo:

Sr. Maciá—Cuando se votó la ley de distritos, fuí el único en este honorable cuerpo que pedí que constara mi voto en contra, porque consideraba sus prescripciones inconstitucionales.

Digo, al dar mi voto, estas palabras.

Julio 22 de 1905

CÁMARA DE SENADORES

24ª sesión ordinaria

porque quiero que conste que soy lógico con mi voto dado hace dos años, votando por la afirmativa.

Sr. Secretario Ocampo—Han votado por la afirmativa catorce señores senadores y cuatro por la negativa.

→ Se lee el artículo 1.º

Sr. Presidente—Se va á votar si se aprueba el artículo que se ha leído

—Se vota y resulta afirmativa

Sr. Maciá—Podrían darse por aprobados los artículos que no sean observados.

—Asentimiento.

Sr. Presidente—Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se leen y se aprueban sin observación desde el artículo 2º al 10, inclusive.

—Se lee el 11.

Sr. Yofre—Pido la palabra.

Pienso que debe agregarse á este segundo inciso «salvo los recursos establecidos por el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863», que son aquellos casos en que está comprometido un principio de la Constitución ó una ley especial del Congreso, en los cuales la ley del 63, repetida en la ley número 1902 de creación de las cámaras federales de apelación, permite llevar en apelación ante la Suprema Corte.

La razón es ésta: la necesidad de mantener la uniformidad de la jurisprudencia en esos casos en que está comprometido un principio de la Constitución ó una ley especial del Congreso.

Como hay tres cámaras federales, pueden establecer diversidad de interpretación de la ley; y, para mantener la unidad de jurisprudencia que la Constitución ha querido conservar, se deja en esos casos el recurso ante la Suprema Corte.

Pienso que no ha tenido el propósito

la Comisión de suprimir ese recurso que existe en la Ley Electoral, en la ley de creación de las cámaras y en la ley del 14 de septiembre de 1863, y por eso propongo agregar: *salvo los recursos establecidos por el artículo 14 de la ley de 14 de septiembre de 1863.*

Sr. Presidente—¿La Comisión acepta el agregado?

Sr. Pérez—No hay ningún inconveniente. Me parecen muy oportunas las observaciones del señor Senador. Efectivamente, hay casos en que el recurso debe ir á la Suprema Corte; y, según el artículo en discusión, todo procedimiento terminaría ante las cámaras de apelaciones. Me parece que es muy lógico el agregado.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo con el agregado.

Sr. Uriburu (F.)—Pido que se vote el artículo tal como lo ha presentado la Comisión.

Sr. Presidente—La Comisión ha aceptado el agregado.

Sr. Yofre—Y entiendo que el señor Ministro también lo acepta.

Sr. Ministro del Interior—Yo he entendido que no era necesario el agregado propuesto por el señor Senador, no porque esté mal, sino porque está salvado el principio á que él se ha referido en la ley de organización de las cámaras de apelación y también en las facultades propias de la Suprema Corte, como ella las ha entendido con posterioridad á la creación de las cámaras de apelación; pero, cuando se trata de dictar una ley, todo lo que es aclarar un concepto no está de más y es, por el contrario, muy conveniente.

Creo, pues, que debe aceptarse el agregado propuesto por el señor Senador por Córdoba.

Sr. Uriburu (F.)—No seré más cáñolico que el Papa.

—Se aprueba el artículo con el agregado, así como el resto del despacho.